

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/CTE/M/2

8 de mayo de 1995

(95-1186)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 1995

Nota de la Secretaría

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente celebró su segunda reunión el 6 de abril de 1995, bajo la presidencia del Embajador Juan Carlos Sánchez Arnau, de la Argentina. Se aprobó el orden del día de la reunión reproducido en el aerograma WT/AIR/31.

2. El Presidente recordó que la reunión en curso se centraría en los puntos cuarto, quinto y décimo del programa de trabajo, tras lo cual se haría una recapitulación del séptimo punto, en que se había centrado la última reunión. Señaló a la atención de los presentes que la documentación preparada por la Secretaría para cada uno de los puntos figuraba, respectivamente, en los documentos WT/CTE/W/5, PC/SCTE/W/4, PC/SCTE/W/2 y WT/CTE/W/6. En relación con el quinto punto, la delegación de Chile había presentado el documento WT/CTE/W/2. Para el debate sobre el décimo punto, la delegación de los Estados Unidos había presentado el documento PC/SCTE/W/6. La Secretaría había puesto también a disposición de los interesados el informe que había presentado, bajo su propia responsabilidad, a la Secretaría de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible para el tercer período de sesiones de la Comisión (WT/CTE/W/3), así como el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible preparado por la Secretaría de la UNCTAD, encargada de coordinar las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y el comercio.

Condición de observador de las organizaciones intergubernamentales

3. El Comité acordó otorgar la condición de observador a las organizaciones intergubernamentales (OIG) que hubieran sido aceptadas como tales en su última reunión, en tanto se aprobaran las condiciones y criterios para el otorgamiento de la condición de observador a las OIG en la OMC.

Punto 4 del programa de trabajo:

Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos

4. El representante del Japón dijo que, aunque en el documento WT/CTE/W/5 se hacía referencia a una amplia concordancia de pareceres y un común entendimiento que habían surgido en el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional (Grupo MACI) con respecto a la transparencia, creía recordar que en los trabajos del Grupo MACI no se había llegado a ninguna conclusión específica ni se había alcanzado una etapa prescriptiva. Su delegación consideraba que la transparencia no era un fin en sí misma; el objetivo era fortalecer el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. Aunque la OMC tenía mecanismos de notificación amplios, su delegación temía que hubiera un número y una variedad cada vez mayores de medidas ambientales que fueran restrictivas para el comercio y que se desarrollaran de manera más amplia y sistemática fuera del marco de la OMC. Se había dicho que era preciso adoptar iniciativas multilaterales antes de que un bloque económico importante se negara

a aceptar los productos importados que no satisficieran ciertos criterios que ese bloque ya hubiera elaborado. La mejora de los mecanismos de transparencia de la OMC sería un paso útil para hacer frente a esas preocupaciones, y el Comité podría identificar las medidas con consecuencias para el comercio que estuvieran fuera del ámbito de esos mecanismos. El documento TRE/W/7 proporcionaba una base para identificar las lagunas, aunque muchas de las medidas enumeradas ya estaban abarcadas en la OMC.

5. Con respecto a los servicios de información ambiental, no era corriente en el GATT/OMC, ni probablemente factible, establecer mecanismos de transparencia basados en el propósito de una medida, y no en su naturaleza. Dada la subjetividad de la definición del alcance del término "medio ambiente", sería difícil identificar qué medidas se habían tomado con fines ambientales. Se preguntaba si se esperaba que los gobiernos estuvieran al corriente de las medidas voluntarias y, en caso negativo, de qué manera recogería la OMC información de entidades privadas como un órgano intergubernamental. La prioridad asignada a las medidas voluntarias dependería del grado en que afectarían realmente al comercio. Debería evitarse la duplicación dentro de la OMC y entre la OMC y otros mecanismos de transparencia multilaterales y debería cuidarse también de no sobrecargar el proceso de notificación, dado que el cumplimiento había sido una dificultad práctica en algunas iniciativas de reforma anteriores.

6. El representante de Nigeria dijo que el documento WT/CTE/W/5 ayudaba a identificar los puntos que requerían más debate y sobre los cuales todavía no se había llegado a posiciones comunes con respecto a la transparencia, que era un elemento importante de la labor del Comité, ya que creaba confianza en el sistema comercial y era necesaria para la estabilidad y la previsibilidad de las expectativas de las naciones que comerciaban. La transparencia proporcionaba una herramienta poderosa para hacer frente a las crisis a medida que surgían, como en el caso de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y las recientes controversias sobre pesca, que afectaban el amplio espectro de los vínculos entre el comercio y el medio ambiente. Aunque había acuerdos en materia de pesca y conservación de los peces, habían surgido regularmente controversias sobre la transparencia de los métodos de pesca, la transparencia en cuanto a las bodegas de los buques de pesca rastreadores, la transparencia de la intención y la transparencia con respecto a si los países estaban efectivamente reglamentados por las cuotas de pesca convenidas. Las disposiciones de transparencia explícitas y verificables reducían las posibilidades de que hubiera restricciones y distorsiones del comercio y mejoraban la adaptación de los empresarios a los cambios en la política comercial.

7. En opinión de su delegación, las disposiciones sobre transparencia debían ser explícitas, amplias en su alcance y viables en su aplicación. Dejando de lado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC), no podían adoptarse disposiciones *a priori* sin una comprensión de las tendencias basada en datos concretos; raramente se tomaban disposiciones *a posteriori* sin que hubiera supuestos, predicciones y deducciones. Su delegación señalaba a la atención la declaración contenida en el documento WT/CTE/W/5 en el sentido de que la norma del GATT era el enfoque *a posteriori*, aunque se obtendrían beneficios considerables de la notificación *a priori* y la realidad entrañaría una combinación de los enfoques *a priori* y *a posteriori*. Su delegación consideraba que en la etapa actual las disposiciones del artículo X, junto con la Decisión relativa a los procedimientos de notificación y algunos elementos del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) eran suficientes para la transparencia. A medida que aumentaba la cooperación multilateral, esas disposiciones podrían ampliarse para cubrir las áreas de conflicto que surgieran o para integrar arreglos de verificación para las disposiciones sobre transparencia. La transparencia era un medio para lograr un comercio sin restricciones y un número de disposiciones mayor que el actualmente existente podría menoscabar la capacidad de los Miembros de la OMC, sobrecargar a la Secretaría y perjudicar el logro del objetivo principal de ampliar el comercio en forma compatible con el desarrollo sostenible.

8. Se desprendía implícitamente de algunas de las opiniones expresadas anteriormente que deberían poder aplicarse niveles variables de transparencia según las circunstancias. En opinión de su delegación, sería un error adoptar ese enfoque porque su validez era dudosa y crearía confusión. Las disposiciones sobre transparencia debían tener un alcance máximo; si una medida comercial utilizada con fines ambientales o una medida ambiental con efectos comerciales significativos no era transparente en grado máximo, no satisfaría las condiciones de la transparencia. El Comité debía evitar caer en el error de las declaraciones condicionales sobre la aplicación de las disposiciones de transparencia, tales como "cuanto mayor sea la capacidad de una medida de tener efectos comerciales significativos, tanto mayor debe ser su transparencia para los interlocutores comerciales del país" (WT/CTE/W/5), de lo que se desprendía que podrían aceptarse niveles inferiores de transparencia cuando los efectos comerciales fueran menos significativos. Esto crearía dificultades de interpretación y lagunas que llevarían a que las disposiciones se explotaran o quedaran menoscabadas. Era preciso que la transparencia incluyera el deber de publicar y notificar, que las interpretaciones de la transparencia tuvieran un alcance máximo y que las reglamentaciones notificadas se aplicaran de manera razonable, uniforme y no discriminatoria. Su delegación consideraba que la transparencia era una cuestión horizontal que afectaba una amplia gama de otros asuntos y que los debates serían más productivos cuando se refirieran a grupos particulares de productos.

9. El representante de los Estados Unidos dijo que, desde los debates realizados en el Grupo MACI sobre esta cuestión, se habían introducido mejoras a raíz de las disposiciones sobre transparencia de la OMC, que incluían un aumento del alcance de las medidas sujetas a notificación *a priori* con arreglo al Acuerdo OTC y al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo AMSF). En relación específicamente con una preocupación expresada en debates anteriores, en el Acuerdo OTC se hacían extensivos los requisitos de notificación a las autoridades de los gobiernos de nivel inferior al del gobierno central. Además, las disposiciones en materia de transparencia del Acuerdo sobre Subvenciones constituían un avance importante, ya que en el párrafo 3 del artículo 8 se imponían requisitos obligatorios de notificación para ciertas subvenciones a fin de poder considerarlas no recurribles.

10. Los debates sobre la transparencia habían llegado a un punto en que las cuestiones estaban bien desarrolladas. Tras los resultados alcanzados en la Ronda Uruguay, su delegación consideraba que no había brechas reales en los requisitos de transparencia de la OMC y que el nivel y el grado de transparencia para los distintos tipos de medidas eran en su mayor parte satisfactorios. Sin embargo, creía que el Comité podría explorar la posibilidad de incrementar la transparencia con respecto a los requisitos de embalaje y manipulación de desechos y le interesaba saber si otras delegaciones compartían esa opinión o consideraban que sería útil concentrarse en otras esferas.

11. La sugerencia de crear servicios de información sobre las medidas ambientales merecía consideración. Sin embargo, la experiencia de su delegación en el establecimiento de servicios de información con arreglo a los Acuerdos OTC y AMSF ponía de relieve la necesidad de tener en cuenta los recursos que resultarían necesarios. Era preciso también decidir si era conveniente diseñar un mecanismo de transparencia con una cobertura definida en términos del propósito en cuanto a políticas de una medida, por oposición a sus características; por ejemplo, si se necesitaba más transparencia para un sistema impositivo cuando éste tenía por fin lograr objetivos ambientales, en lugar de recaudar fondos. Era también necesario evitar una proliferación posiblemente confusa de servicios de información, además de los previstos en los Acuerdos OTC y AMSF. Si se creaba un tercer servicio, cuyo ámbito de responsabilidad sería probablemente vago, dada la falta de definición de lo que abarca el término "medio ambiente", ese servicio no debería confundir a los usuarios en lo que respecta a dónde debían hacer sus averiguaciones. Sin embargo, la idea de los servicios de información merecía seguir examinándose.

12. La representante del Canadá recordó algunos de los puntos que se habían planteado sobre la transparencia, como la cuestión de que los requisitos de transparencia para las medidas ambientales no debían ser más gravosos que para otras esferas de formulación de políticas que afectaban al comercio, que debía evitarse la duplicación de los requisitos de transparencia y que el Acuerdo OTC creaba un alto nivel de transparencia. En opinión de su delegación, el Comité debería encarar la transparencia como una cuestión horizontal y como parte de la labor sobre los distintos tipos de medidas ambientales relacionadas con el comercio que se estaban examinando. Proponía que los debates se concentraran en las cuestiones conexas de los programas voluntarios como el etiquetado ecológico, la transparencia y el Acuerdo OTC. Observó que la renuencia anterior a examinar el Acuerdo OTC, dado que no estaba en vigor, ya no era un impedimento. Su delegación consideraba que había bases para tratar de lograr un consenso con respecto a que los programas voluntarios, como los de etiquetado ecológico, estaban cubiertos por lo menos por el Código de Buena Conducta del Acuerdo OTC. Esto significaría que estarían sujetos a varios requisitos de transparencia, como la publicación de sus programas de trabajo, la notificación de las directrices específicas que se estuvieran elaborando, la notificación por lo menos 60 días antes de su aprobación de los proyectos de directrices a fin de permitir la presentación de observaciones de las partes interesadas dentro del territorio de otros Miembros de la OMC y el suministro, a pedido de parte, de copias de los proyectos de directrices al mismo costo que a las partes nacionales. Añadió que en los debates sería preciso examinar detalladamente qué disciplinas existían en esa esfera y si eran adecuadas; su delegación consideraba que un período de sesiones informal resultaría útil para iniciar esos debates y para preparar al Comité para la reunión de octubre sobre etiquetado ecológico. Además, a medida que progresara el análisis de la transparencia y de la relación de las medidas con el Acuerdo OTC en el Comité, sería necesario establecer cierta coordinación con el Comité del Acuerdo OTC.

13. El representante de Noruega consideraba que, aunque el Grupo MACI había realizado un debate amplio sobre la transparencia, el Comité tendría que tener en cuenta los Acuerdos de la OMC actualmente en vigor. Esos Acuerdos introducían algunos nuevos requisitos de notificación y habían llenado por lo menos algunas de las posibles lagunas en las disposiciones de transparencia identificadas en el Grupo MACI, por ejemplo en la esfera de las subvenciones. En ellos se hacía frente asimismo a otras preocupaciones expresadas en el Grupo MACI, como la necesidad de evitar la duplicación de las notificaciones. Además, un Grupo de Trabajo del Consejo del Comercio de Mercancías haría un examen a fondo de todas las obligaciones de notificación existentes a fin de simplificarlas, normalizarlas y consolidarlas.

14. Su delegación apoyaba la conclusión preliminar de que las disposiciones del GATT, complementadas por las disposiciones de la OMC y del MEPC, creaban una base amplia para garantizar la transparencia, incluso para las medidas ambientales que era probable que tuvieran efectos comerciales significativos. Estas disposiciones podrían ampliarse y precisarse cuando fuera necesario, teniendo presente que los requisitos de transparencia para las medidas ambientales no debían ser más gravosos que los existentes en otras esferas de formulación de políticas que afectaban al comercio y no debían tampoco convertirse en una carga administrativa. Sobre esta base, el Comité podría aclarar el grado en que las medidas situadas fuera de los Acuerdos de la OMC estarían sujetas a disciplinas de transparencia; por ejemplo, su delegación consideraba que debería preverse alguna forma de transparencia para los programas de etiquetado ecológico, los sistemas de pago y reembolso de depósitos y los requisitos de reciclado. Estaba de acuerdo en que el Comité debía encarar la transparencia como una cuestión horizontal. Debería asegurarse que los Miembros cumplieran sus obligaciones de transparencia en la interfaz entre el comercio y el medio ambiente. Además de los exámenes multilaterales incluidos en varios Acuerdos, su delegación consideraba que sería apropiado que se adoptaran disposiciones complementarias de ese tipo en el MEPC.

15. La representante de México dijo que la cobertura y las disciplinas de la transparencia podían desempeñar un papel importante en lo relativo a asegurar una mayor previsibilidad del comercio, además de asegurar el nivel necesario de protección ambiental. La transparencia era parte de un todo, y uno de sus elementos más importantes era el proceso de notificación *a priori*, que permitía evitar las restricciones y las distorsiones innecesarias del comercio, daba suficiente tiempo para que los abastecedores se ajustaran a las nuevas disposiciones legislativas y aseguraba que las medidas ambientales relacionadas con el comercio no tuvieran efectos adversos sobre el comercio. Sin embargo, la transparencia no era un fin en sí misma y no podía resolver conflictos de interés reales. Aun en el sentido más amplio, no bastaba con resolver las distorsiones del comercio que empezaban a sentirse como resultado de la proliferación de instrumentos y de programas ambientales voluntarios basados en criterios definidos unilateralmente. La introducción de medidas como el etiquetado y el embalaje basados en el análisis del ciclo de vida podía afectar adversamente las importaciones, favorecer la producción nacional y no contribuir a la solución de los problemas ambientales. Podía también dar lugar a nuevos problemas al imponer condiciones ambientales inapropiadas a los abastecedores extranjeros.

16. Su delegación consideraba que valía la pena volver a examinar la lista de posibles lagunas en materia de transparencia enumeradas en el documento WT/CTE/W/5 a la luz de las disposiciones de la OMC y del alto nivel de transparencia que existía con arreglo a los Acuerdos OTC y AMSF, ya que muchas de esas lagunas podrían haberse superado. Sin embargo, su delegación dudaba de que las medidas voluntarias y ciertas otras medidas estuvieran cubiertas de manera de asegurar que no discriminaban *de facto* contra las importaciones, en particular cuando las medidas reflejaban las preferencias ambientales del país importador. En los debates sobre el tercer punto debería también aclararse la adecuación de las disciplinas de transparencia de la OMC a este respecto. La aplicación efectiva del trato de la nación más favorecida y del trato nacional era esencial para asegurar la previsibilidad y las condiciones comerciales justas cuando se aplicaban de manera transparente medidas necesarias para la protección del medio ambiente.

17. Su delegación apoyaba la propuesta de la delegación del Canadá de que se examinara la adecuación de las disposiciones de transparencia del Acuerdo OTC con respecto a medidas como el etiquetado ecológico, el embalaje, el reciclado y los requisitos de reutilización y manipulación de desechos. Creía que esas medidas ya estaban cubiertas por el Acuerdo OTC, pero estaba dispuesta a participar en un esfuerzo para confirmarlo. En el caso de las medidas voluntarias, era válido considerar la posibilidad de establecer servicios de información ambiental, así como la notificación *a priori* de las medidas con la posibilidad de realizar consultas previas, teniendo en cuenta las preocupaciones que se habían planteado con respecto a la viabilidad y la necesidad de evitar la proliferación. El Código de Buena Conducta del Acuerdo OTC debería contribuir a aliviar la falta de transparencia del etiquetado voluntario, pero valía la pena confirmar por consenso, como lo había sugerido la delegación del Canadá, que cubría efectivamente esas normas. Además, sería necesario volver a revisar el funcionamiento del Código y evaluar su eficacia.

18. El representante de la Argentina dijo que los debates del Grupo MACI sobre transparencia habían llevado a su delegación a la conclusión de que muchas medidas ambientales estaban cubiertas por obligaciones de notificación existentes, aunque los países muchas veces no las cumplían. Sin embargo, había lagunas en relación con algunas medidas que tenían efectos comerciales pero no estaban sujetas a obligaciones de notificación suficientemente precisas, ya que la mayoría de las medidas ambientales no se aplicaban como restricciones fronterizas sino como medidas internas, como ocurría por ejemplo con los recargos y los impuestos o las normas y reglamentaciones técnicas que podían afectar el acceso a los mercados y las condiciones de competencia. En cuanto a las medidas para las cuales no existían normas de transparencia claras y precisas, su delegación consideraba que las siguientes eran especialmente importantes: a) los requisitos de manipulación de desechos, incluidos los programas de recuperación, reutilización y reciclado del papel, los plásticos, el aluminio y el vidrio, y las

obligaciones de recolección. Estas medidas no se encuadraban en la definición de una reglamentación técnica del Acuerdo OTC y su notificación no era obligatoria en virtud de ese Acuerdo; b) las disposiciones no obligatorias, en especial los programas de etiquetado ecológico, incluidas las evaluaciones de los procesos y métodos de producción (PMP), cuyas externalidades no se reflejaban en el producto y que no estaban en consecuencia cubiertas por las disposiciones del Acuerdo OTC; c) las medidas sobre embalaje y etiquetado y otras medidas ambientales de tipo general adoptadas por los gobiernos provinciales o municipales o directamente por la industria; d) ciertos instrumentos económicos utilizados con fines de política ambiental, como los impuestos, los reintegros y las subvenciones que no estaban directamente relacionados con el comercio pero tenían consecuencias sobre él; e) las medidas aplicadas en virtud del artículo XX; y f) las medidas comerciales adoptadas en cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA).

19. Aunque no se había pedido al Grupo MACI que aprobara conclusiones ni recomendaciones, habían surgido algunos puntos generales de consenso, a saber: a) que los requisitos adicionales de transparencia establecidos para las medidas ambientales no debían ser más gravosos que los aplicables a otras políticas que afectaban el comercio; b) que debía evitarse la duplicación de otros procedimientos de notificación; y c) que los servicios de información ambiental podían llenar las lagunas de los sistemas de notificación existentes, por ejemplo, con respecto a las medidas voluntarias y a las medidas adoptadas fuera de los gobiernos centrales a las que debían tener acceso los gobiernos y los particulares. Aunque no se trataba de conclusiones definitivas, su delegación consideraba que podían utilizarse como punto de partida para los trabajos futuros. La transparencia era una cuestión que abarcaba muchos aspectos y debía analizarse en forma separada para cada tipo de medida comercial adoptada por razones ambientales y para cada medida ambiental con efectos comerciales. Su delegación consideraba que el Comité debía llegar a un consenso sobre normas generales de transparencia, definir las mejoras necesarias en los mecanismos de transparencia en relación con las lagunas identificadas en el documento WT/CTE/W/5 y exponer con más precisión la propuesta de crear servicios de información ambiental como un elemento importante de esas mejoras. Otra posibilidad sería que la cuestión de la transparencia se tratara cuando se examinaba cada tipo de medida dentro de otros puntos, en cuyo caso los trabajos relativos a este punto se tratarían en los dos últimos. Su delegación apoyaba la observación de la delegación de México de que la transparencia era una condición necesaria pero no suficiente para evitar los conflictos que podían surgir, por ejemplo, con respecto a las medidas relativas al etiquetado ecológico. La transparencia no podía suplir la necesidad de establecer disciplinas basadas en los fundamentos ambientales que debían tener algunas medidas si tenían efectos comerciales.

20. El representante de Colombia dijo que los Miembros de la OMC habían convenido en la necesidad de establecer normas y mecanismos de transparencia claros. El Comité debía fijar criterios para garantizar niveles adecuados de transparencia e identificar las lagunas existentes al respecto, entre otras cosas en lo concerniente a: i) la publicación *a posteriori* de las leyes, que era insuficiente; la notificación debía hacerse *a priori* de modo que las partes interesadas de otros Miembros de la OMC pudieran formular observaciones sobre los proyectos de ley, como ya se hacía en virtud del Acuerdo OTC; y ii) las medidas adoptadas por los órganos gubernamentales de nivel inferior al de los órganos federales y las medidas voluntarias del sector privado como, por ejemplo, las de etiquetado ecológico. Con respecto a las medidas comerciales adoptadas con arreglo a las disposiciones de los AMUMA, era importante evitar la duplicación de las obligaciones de notificación y disipar las dudas relativas a su transparencia, por ejemplo, con respecto a los Miembros de la OMC que no eran partes en los AMUMA o para los cuales los requisitos de transparencia de los AMUMA no estaban al mismo nivel que los de la OMC. Su delegación apoyaba la creación de servicios de información ambiental similares a los existentes con arreglo a los Acuerdos OTC y AMSF y ponía de relieve la importancia del MEPC para el proceso de transparencia.

21. El representante de Corea dijo que la transparencia era una herramienta necesaria pero no suficiente para minimizar los efectos comerciales innecesarios. Algunas medidas, como las normas basadas en los PMP, estaban fuera del alcance de las normas actuales de la OMC y otras, como los requisitos de contenido de material reciclado, eran compatibles con esas normas pero causaban efectos comerciales *de facto*. En el documento WT/CTE/W/5 se describían las lagunas en materia de transparencia de las medidas ambientales, incluidas, entre otras, las medidas comerciales adoptadas de conformidad con los AMUMA, los requisitos de etiquetado ecológico y de embalaje, los instrumentos económicos y las medidas basadas en los PMP. Todo debate sobre el alcance o la cobertura de los mecanismos de transparencia relacionados con esas medidas concretas debía estar precedido por un debate sobre su aceptabilidad con arreglo a la OMC. Estaba de acuerdo en que los debates relativos a la transparencia debían constituir un componente de los trabajos dentro de los puntos primero y tercero, en lugar de ser un tema separado. En lo concerniente al nivel de transparencia, su delegación consideraba que los mecanismos de la OMC serían eficaces y podrían detallarse más en caso necesario. La mejora de la transparencia mediante la ampliación del uso de los procedimientos de notificación *a priori*, como en el Acuerdo OTC, tenía varias ventajas, como se señalaba en el documento WT/CTE/W/5, pero era preciso evitar la duplicación de las obligaciones de notificación. A fin de identificar las lagunas en materia de transparencia sería necesario analizar mejor, caso por caso, las principales medidas ambientales, como se había hecho en el Grupo MACI.

22. La representante de Suiza apoyaba varios puntos generales expuestos en el documento WT/CTE/W/5 sobre los cuales se había llegado a un acuerdo: la transparencia fomentaba la confianza y daba seguridad y estabilidad al sistema multilateral de comercio y previsibilidad a las condiciones comerciales de las empresas privadas; los requisitos de transparencia relacionados con el medio ambiente no debían ser más gravosos que los aplicables en otras esferas; debía evitarse la duplicación de los trabajos; las medidas de transparencia debían ser amplias, pero no plantear una carga administrativa; la notificación *a priori* debía dar resultados sustanciales; y el papel de los servicios de información, especialmente en el Acuerdo OTC, era importante. Los trabajos futuros debían ser más específicos y técnicos. En el Grupo MACI, su delegación había dicho que sería ambicioso y llevaría mucho tiempo identificar todas las lagunas posibles. Consideraba que, en vista de los Acuerdos de la OMC, el Comité debía concentrarse en las cuestiones planteadas en el documento WT/CTE/W/5, como el grado en que las subvenciones ambientales estaban cubiertas por las disposiciones de transparencia de la OMC; si las medidas adoptadas por las autoridades locales estaban o no cubiertas por esas disposiciones; si el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) se aplicaba a las medidas ambientales que afectaban a los servicios; si las disciplinas de la OMC eran aplicables a los programas de etiquetado ecológico basados en los análisis del ciclo de vida que tenían PMP no incorporados; y si las medidas comerciales basadas en PMP y no relacionadas con los productos estaban o no cubiertas.

23. Su delegación consideraba que los trabajos sobre transparencia debían concentrarse en la cuestión de las deficiencias de los mecanismos de transparencia de la OMC, así como en los problemas del cumplimiento insuficiente. Como se señalaba en el documento WT/CTE/W/5, esto último podía ser resultado de la forma diferente en que los Miembros entendían e interpretaban sus obligaciones, y su delegación no se oponía a la sugerencia de que esto se evaluara mediante cuestionarios o encuestas enviados por la Secretaría. En los trabajos futuros deberían identificarse las cuestiones restantes y examinarse recomendaciones tendientes a modificar las disposiciones de transparencia de la OMC.

24. El representante de Hong Kong dijo que la transparencia contribuía fundamentalmente a prevenir las controversias al hacer frente a los problemas antes de que se convirtieran en conflictos comerciales, y modificaba el impacto sobre el comercio de las medidas ambientales que tenían efectos de restricción o distorsión del comercio. Se necesitaba un sistema suficientemente eficaz, pero flexible, de transparencia para asegurar las corrientes de información y la pertinencia y utilidad de ésta para los comerciantes. Consideraba que el examen de este tema estaba más maduro que el de otros. Dos tipos de lagunas que debían encararse eran las lagunas físicas relacionadas con la cobertura y las lagunas cualitativas relacionadas con el cumplimiento de las disciplinas de la OMC existentes.

25. Su delegación tenía una actitud positiva con respecto a la propuesta de establecer servicios de información, dada su experiencia con los incluidos en el Acuerdo OTC, pero consideraba que era necesario definir sus objetivos y determinar si deberían basarse en la naturaleza de la medida o en su propósito. El Comité debía ser consciente del punto en el cual podría ir más allá del análisis de la transparencia de una medida y aventurarse en cuestiones como la legitimidad de la medida con arreglo a las normas de la OMC. No había todavía un entendimiento común de las medidas abarcadas ni de su relación con las disciplinas existentes de la OMC. En consecuencia, su delegación apoyaba la sugerencia de la delegación del Canadá de examinar una cuestión como el etiquetado ecológico al nivel técnico, sin ninguna presunción en cuanto a si las medidas basadas en PMP estaban cubiertas por el Acuerdo OTC. El Comité podría organizar sus debates relativos a la transparencia sobre esta base.

26. El representante de las Comunidades Europeas estaba de acuerdo en que la transparencia era esencial para prevenir los conflictos comerciales. Su delegación compartía las conclusiones del Grupo MACI expresadas en el documento L/7402 en el sentido de que la transparencia no debía ser un fin en sí misma; los requisitos de transparencia para las medidas ambientales no debían ser más estrictos que los aplicables en el caso de otras medidas; debía considerarse el cumplimiento de las normas de transparencia, posiblemente a través del MEPC; y el volumen de notificaciones de transparencia debía ser funcionalmente manejable. Además, su delegación consideraba que la notificación debía limitarse a las medidas con efectos comerciales significativos. Quedaba mucho por hacer para llegar a una definición uniforme de la transparencia, así como también para considerar las lagunas existentes. Una tarea inicial podría consistir en elaborar un entendimiento de la expresión "efectos significativos para el comercio internacional" en cuanto se relacionaba con las medidas ambientales. A partir de esto podría determinarse, caso por caso, para qué medidas ambientales se necesitarían nuevos mecanismos de notificación. Una vez determinado qué debía presentarse a los mecanismos de transparencia de la OMC, debería examinarse el tipo de transparencia, es decir, *a posteriori* o *a priori*, notificación o publicación; en ese sentido, los servicios de información constituirían una forma eficiente y flexible de asegurar la transparencia.

27. Había disposiciones sobre transparencia *a posteriori* en el artículo X del GATT, en el Entendimiento relativo a las Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia, de 1979, en el artículo III del AGCS, en el Anexo B del Acuerdo AMSF y en los artículos 2.5 y 8.11 del Acuerdo OTC. El alcance de algunas de esas normas era incierto, y en particular el artículo X y el Entendimiento de 1979 podrían ser insuficientes con respecto a algunas medidas ambientales debido a su complejidad técnica y sus posibles efectos comerciales. Los Acuerdos OTC y AMSF contenían el tipo más complejo y eficiente de transparencia y se aplicaban a todas las medidas técnicas que afectaban a productos que no estaban basadas en normas internacionales y tenían efectos significativos sobre el comercio. Para determinar las lagunas posibles, el mejor enfoque consistía en un análisis caso por caso o en la consideración de las medidas ambientales por categorías individuales.

28. En el sector de los servicios, las medidas ambientales con efectos sobre el comercio podrían identificarse dentro del octavo punto. Las subvenciones, incluidas las otorgadas con fines ambientales, estaban sujetas a normas de transparencia con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y sería útil analizar inicialmente la importancia de sus efectos comerciales. Los impuestos indirectos estaban ya sujetos a requisitos de transparencia *a posteriori* con arreglo al artículo X del GATT y al Entendimiento de 1979; podría considerarse si esas normas existentes eran satisfactorias con arreglo al tercer punto. Debería considerarse si los sistemas de depósito con requisitos de embalaje y devolución tenían efectos comerciales significativos y deberían estar sujetos a normas de transparencia. Algunos requisitos ambientales técnicos, como los de embalaje y etiquetado, podían tener efectos comerciales significativos y era necesario determinar la medida en que había que aumentar su transparencia.

29. No era apropiado considerar todavía las medidas ambientales basadas en los PMP como una categoría separada. Cuando esas medidas afectaban las características de un producto, estaban cubiertas por el Acuerdo OTC. Dado que su ámbito de aplicación debería permanecer en principio confinado al territorio nacional, no tendrían probablemente efectos comerciales significativos. No debían tampoco descuidarse las medidas ambientales adoptadas con arreglo y con sujeción a requisitos de transparencia en virtud de los AMUMA. El Comité debía asegurarse de que esas normas fueran satisfactorias y evitar al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos. Su delegación quería hacer referencia al vínculo entre éste y otros puntos cuyos resultados orientarían las conclusiones del Comité. Los debates sobre el cuarto punto deberían inspirarse en los resultados obtenidos sobre los puntos primero, tercero a) y b) y octavo. Al terminar la labor del Comité, podría encararse la cuestión de la transparencia de las medidas ambientales concentrándose en las medidas con efectos comerciales significativos.

30. El representante del Brasil convino en que las obligaciones de transparencia para las medidas ambientales relacionadas con el comercio no debían ser más gravosas que en otras esferas de formulación de políticas que afectaban el comercio. El Comité debía considerar la transparencia de los requisitos de manipulación de desechos, recolección y etiquetado ecológico, donde podría haber lagunas en las disciplinas sustantivas de la OMC en materia de obstáculos no arancelarios. Apoyaba la propuesta de la delegación del Canadá de que se examinara a un nivel técnico la relación entre ciertas medidas ambientales relacionadas con el comercio, como los requisitos de etiquetado ecológico y el Acuerdo OTC. La propuesta de su delegación de establecer servicios de información se había basado en parte en la observación de que podía lograrse la transparencia por otros medios y ella no debía identificarse con los requisitos de notificación, que podían resultar gravosos para las administraciones nacionales. Los servicios de información de los Acuerdos OTC y AMSF podían servir de modelo y ampliarse para abarcar las medidas ambientales relacionadas con el comercio.

31. El representante de Australia dijo que la transparencia del comercio y de las políticas relacionadas con el comercio con efectos comerciales significativos contribuía a asegurar la apertura y la previsibilidad del sistema multilateral de comercio, servía como forma de evitar las diferencias y podía también contribuir a promover políticas comerciales y ambientales que se apoyaran mutuamente. Una transparencia efectiva en la aplicación de las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente y las medidas ambientales con efectos comerciales significativos podía ayudar a disipar el temor de que hubiera una intención proteccionista tras esas medidas y brindar un medio de asegurar que las medidas adoptadas por otros países fueran proporcionales a los objetivos ambientales perseguidos y fueran lo menos restrictivas posible para el comercio. Era importante asegurar que las disposiciones de transparencia y notificación no llegaran a ser indebidamente gravosas, no impusieran una carga administrativa exagerada y no duplicaran los trabajos en otros foros.

32. Su delegación estaba de acuerdo en que había vínculos importantes entre el cuarto punto y, especialmente, el tercer punto, pero también los puntos octavo y noveno. La transparencia podría ser también importante en los trabajos sobre la relación entre las normas de la OMC y las medidas comerciales adoptadas de conformidad con los AMUMA. Esos vínculos podían examinarse dentro de otros temas, como el etiquetado ecológico. La mejora de la transparencia, los procedimientos de notificación y las disposiciones para prever la celebración de consultas oportunas podían contribuir a minimizar las distorsiones del comercio y a maximizar la eficacia ambiental de los programas de etiquetado ecológico. La aclaración de la relación entre los programas de etiquetado ecológico y el Acuerdo OTC ayudaría al Comité a entender mejor su cobertura dentro de la OMC, aclarar el papel de los procedimientos de notificación en cuanto a mejorar la transparencia y responder a las preocupaciones sobre el etiquetado ecológico o los requisitos de embalaje y tratamiento de desechos. Su delegación consideraba que había acuerdo general sobre la contribución que podía aportar la transparencia para asegurar que las medidas comerciales y relacionadas con el comercio no crearan obstáculos innecesarios para el comercio internacional. Los procedimientos de transparencia, notificación y consulta revestían también interés en otros foros como forma de asegurar que los programas de

etiquetado ecológico satisficieran sus objetivos ambientales y que tanto desde la perspectiva comercial como desde la ambiental se reconociera su valor para promover la cooperación internacional a fin de lograr la adopción de buenas políticas y evitar las controversias.

33. El representante de Nueva Zelandia dijo que en su calidad de participante relativamente pequeño en el comercio internacional, activo en una variedad de mercados, su delegación apoyaba la transparencia de todas las medidas comerciales, incluidas las aplicadas con objetivos ambientales, ya que contribuían a garantizar la seguridad y la previsibilidad del acceso a los mercados, a evitar las diferencias y a asegurar que las medidas comerciales se utilizaran de manera efectiva y legítima. Con respecto a las lagunas existentes en las disposiciones de transparencia de la OMC, debían tenerse en cuenta los beneficios netos a fin de justificar la utilización de recursos para llenar esas lagunas y no sobrecargar el sistema. Su delegación consideraba que las disposiciones de la OMC habían mejorado claramente la cobertura de la transparencia de las medidas ambientales con efectos comerciales y apoyaba la necesidad de concentrar el análisis en una gama de estas medidas.

34. El representante del Pakistán dijo que, aunque en el documento WT/CTE/W/5 se sugería que se había llegado a un acuerdo amplio sobre varios puntos relacionados con la transparencia en el Grupo MACI, su delegación consideraba que la labor en el Grupo MACI no había progresado mucho. Por ejemplo, no era apropiado que el MEPC ayudara a señalar a la atención las esferas en que podía mejorarse más el cumplimiento de las disposiciones de transparencia de la OMC, ya que con ello se interpretaría que la función del examen de las políticas comerciales era servir de instrumento para lograr el cumplimiento; eso no era lo que entendía su delegación. El Comité debía ocuparse de las cuestiones más amplias del comercio y el medio ambiente y no examinar los requisitos de notificación con arreglo a los Acuerdos OTC y AMSF. Su delegación creía que la transparencia era la piedra fundamental del multilateralismo y debía ser *a priori* a fin de ayudar a los países en desarrollo, en particular, a ajustar sus productos a las medidas que podían ser restrictivas para el comercio.

35. El representante de la India apoyaba muchas de las observaciones formuladas por otras delegaciones con respecto a la importancia de la transparencia y consideraba que se trataba de una cuestión que afectaba múltiples aspectos y que debería encararse dentro de varios puntos, en particular el séptimo, a saber, la cuestión de las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. El grado de transparencia requerido debía guardar relación con la importancia de los efectos comerciales de una medida. En ese sentido, sugería que el Comité considerase la forma de definir qué era significativo, dado que un efecto comercial insignificante para un país podría considerarse muy significativo para otro. Si había consenso, los requisitos de transparencia deberían aplicarse a medidas no incluidas dentro de las disciplinas de la OMC, con la advertencia de que la notificación de las medidas a la OMC no daría legitimidad a los criterios en los que se basaban, como ocurría con los PMP o la manera en que se determinaban. Su delegación consideraba que se necesitaban nuevas disciplinas sustantivas para impedir que ciertas medidas ambientales relacionadas con el comercio tuvieran efectos comerciales adversos y apoyaba la propuesta de la delegación del Canadá de que se realizara un debate concentrado en el etiquetado ecológico.

36. El representante de Malasia, hablando en nombre de los países de la ASEAN, dijo que la labor del Comité no había llegado a la etapa en que podían extraerse conclusiones de carácter prescriptivo. Su delegación consideraba que había suficientes requisitos de notificación de la OMC para asegurar la transparencia y que la adopción de un enfoque *a priori* para permitir a los interlocutores comerciales de un país ajustarse a los cambios legislativos tenía mérito. Era importante no imponer nuevos requisitos de transparencia gravosos, pero eso no debía ser una excusa para evitar una mayor transparencia, en particular para las medidas voluntarias como el etiquetado ecológico. A este respecto, su delegación había adquirido experiencia, a través del comercio de la madera, sobre las medidas aplicadas al nivel del sector privado y de los gobiernos subnacionales. En consecuencia, su delegación apoyaba la propuesta de la delegación del Canadá de que se examinara desde el punto de vista técnico la cuestión del etiquetado ecológico.

37. El representante de Venezuela estaba de acuerdo en que el principal objetivo de la transparencia era evitar las controversias comerciales. Con respecto a las posibles lagunas en materia de transparencia identificadas en el documento WT/CTE/W/5, consideraba que los PMP eran especialmente importantes dado que las medidas adoptadas sobre esa base, incluso con fines nacionales, podían tener efectos comerciales significativos. Apoyaba la propuesta de examinar formas de llenar las lagunas en materia de transparencia donde existían y estaba interesado a este respecto en los servicios de información.

38. El representante de Egipto dijo que la transparencia no era un fin en sí misma sino un medio importante de aumentar la confianza en el sistema multilateral de comercio que ayudaba a minimizar las restricciones y las distorsiones del comercio. Estaba de acuerdo en que debían identificarse las lagunas en las disposiciones sobre transparencia de la OMC relacionadas con medidas ambientales y en que podían utilizarse como modelo los Acuerdos OTC y AMSF. Las medidas ambientales adoptadas por los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) constituían una posible laguna en materia de transparencia. Su delegación consideraba que debía hacerse una diferencia entre dos categorías de medidas ambientales. La primera estaba constituida por las medidas que afectaban directamente las condiciones de acceso a los mercados, e incluían la prohibición de las importaciones, la venta o la utilización, las reglamentaciones técnicas y los requisitos de licencia o permiso. La mayoría de ellas, si no todas, estaban cubiertas por disposiciones existentes. La tarea del Comité sería elaborar un entendimiento común de las obligaciones, y los trabajos debían encaminarse a asegurar el cumplimiento de esas disposiciones. La segunda categoría incluía las medidas que afectaban la igualdad de oportunidades de competir y afectaban indirectamente las condiciones de acceso a los mercados, como los programas de etiquetado ecológico. Había una laguna con respecto a los impuestos ecológicos y los requisitos de manipulación, reciclado y eliminación de desechos y era preciso desarrollar un entendimiento común sobre la forma de encarar estas cuestiones.

39. Aunque estaba de acuerdo con la delegación de los Estados Unidos en que se necesitaba notificación *a priori* y *a posteriori*, su delegación prefería la notificación *a priori*, ya que contribuía más a fomentar la confianza. La notificación *a priori* efectiva era esencial para aumentar la previsibilidad y dar oportunidades de formular observaciones y realizar consultas previas con las partes interesadas. Era evidente que la transparencia en este contexto fomentaba, entre otras cosas, el intercambio de información para minimizar los efectos comerciales adversos, ayudaba a los interlocutores comerciales a hacer los ajustes necesarios y evitaba posibles controversias a través de la notificación previa y las consultas. Estaba de acuerdo con la delegación de la India en que los progresos en materia de transparencia estaban sujetos a los alcanzados sobre otros asuntos. El Comité debería llegar a un entendimiento común sobre la forma de encarar los programas de etiquetado ecológico, definir lo que se quería decir con efectos comerciales significativos y determinar los efectos en cuanto al acceso a los mercados de las medidas ambientales, especialmente para los países en desarrollo.

40. El Presidente reiteró que el objetivo de la transparencia era dar más seguridad y previsibilidad al sistema comercial y evitar las controversias. Al mismo tiempo, los trabajos emprendidos en ese sentido no debían llevar al Comité a esperar resultados poco realistas, ya que la transparencia no podía sustituir a otras disciplinas a que debían ajustarse las medidas comerciales y era preciso evitar la duplicación y los costos administrativos gravosos. Lo primero que debía encararse era la necesidad de establecer normas claras y precisas sobre el significado de la transparencia de una medida comercial y si la notificación debía hacerse *a priori* o *a posteriori*. La OMC tenía amplias obligaciones de notificación; en consecuencia, cuanto mayor el número de mecanismos de notificación, mayor sería el riesgo de que el cumplimiento no fuera estricto. A este respecto, el Consejo del Comercio de Mercancías llevaría a cabo un examen de las obligaciones de notificación existentes establecidas con arreglo a los Acuerdos de la OMC incluidos en el Anexo 1A a fin de simplificarlos, normalizarlos y consolidarlos. Recordó a los participantes que la cuestión de las obligaciones de notificación se había planteado en la última reunión del Comité de Comercio y Desarrollo en relación con la necesidad de cooperación técnica entre países en desarrollo.

41. Una segunda cuestión de que debía ocuparse el Comité era el análisis caso por caso de cada tipo de medida a fin de determinar su cobertura e identificar las lagunas en materia de transparencia en las normas y disciplinas de la OMC. Un tercer aspecto, que entrañaba un trabajo más técnico y había sido sugerido por la delegación del Canadá, era un análisis de los programas de etiquetado ecológico y los requisitos de embalaje y manipulación de desechos. Debía considerarse si era apropiado concentrarse en los tipos de medidas en que la transparencia podría dar lugar a problemas comerciales y si cada tipo de medida debería analizarse por separado en un grupo de trabajo del Comité. En cuarto lugar estaba la creación de servicios de información, teniendo en cuenta que existía ya un mecanismo similar en los Acuerdos OTC y AMSF. Las nuevas esferas de trabajo podrían relacionarse con la posible contribución del MEPC al fortalecimiento de la transparencia de las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente.

Punto 5 del programa de trabajo:

Relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

42. El representante de Chile presentó la comunicación de su delegación contenida en el documento WT/CTE/W/2, que se refería a algunos aspectos del quinto punto. En este contexto, en el documento se señalaban a la atención del Comité algunos de los aspectos procesales contenidos en el nuevo acuerdo para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que había entrado recientemente en vigor y en cuya sección 6 de la parte XI (política de producción) se reconocía explícitamente la competencia del GATT/OMC. Se disponía así lo siguiente: i) una controversia entre las partes sobre una cuestión puramente técnica, científica o jurídica debería resolverse mediante los mecanismos de solución de controversias contenidos en la parte XV de la Convención; y ii) una controversia sobre asuntos relativos a la política de producción en los fondos marinos internacionales, y en particular a los subsidios y las prácticas comerciales restrictivas, debería someterse a los mecanismos de solución de diferencias de la OMC. No siempre sería fácil determinar a cuál de las dos categorías pertenecía una controversia, ya que lo que una parte consideraba como incentivos para el desarrollo técnico o como medidas para la protección del medio marino podrían constituir para la otra parte simplemente un subsidio encubierto. Por ese motivo, además de estudiar los aspectos teóricos de la atribución de competencia a la OMC con arreglo a la Convención, sería útil establecer una vinculación entre la Secretaría de la OMC y la futura Autoridad de los Fondos Marinos (cuya función desempeñaba entretanto el Departamento de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas).

43. La delegación de Chile quería recordar, utilizando el ejemplo de la Convención, que lo primero que debería considerar un grupo especial al examinar la relación entre la OMC y un AMUMA era si en uno de los tratados en cuestión se había atribuido competencia al otro. En el caso de la Convención, la sección 6 de la parte XI se había introducido para ocuparse de una esfera específica. En otros AMUMA, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se indicaba que no quedarían afectados los derechos y las obligaciones de las partes resultantes de tratados anteriores. La Carta de la Habana de la Organización Internacional del Comercio hacía referencia explícita a los acuerdos multilaterales relacionados con la conservación de los recursos marinos, las aves migratorias y las especies de animales amenazadas. La Convención de 1902 para la protección de las aves útiles para la agricultura y la Convención de 1911 relativa a las medidas para la conservación y la protección de las focas de pelo fino del Pacífico del Norte, así como muchos acuerdos internacionales sobre pesca, contenían medidas comerciales. Durante los trabajos preparatorios de la Carta de la Organización Internacional del Comercio estas cuestiones se habían examinado en forma específica. En los análisis del contexto posterior a la Ronda Uruguay se debería poner de relieve también este valioso aspecto de los trabajos preparatorios para la interpretación del desarrollo sostenible tal como se propiciaba en el Acta Final.

44. El representante de Chile señaló que las negociaciones del Protocolo de Montreal y de la Convención Marco sobre el Cambio Climático también revestían interés. Los negociadores del Protocolo de Montreal habían querido ser coherentes con el GATT y, sobre la base de la opinión jurídica de un experto del GATT sobre la aplicabilidad del artículo XX a sus disposiciones comerciales, consideraron que se había logrado esa conciliación. Sin embargo, el experto del GATT había insistido en que la decisión sobre si podía o no invocarse el artículo XX correspondería a las partes contratantes del GATT. Durante las negociaciones de la Convención sobre el Cambio Climático se había propuesto que las partes sólo pudieran aplicar medidas compatibles con el GATT para cumplir los objetivos de la Convención, cosa que no se había aceptado. Sin embargo, en la redacción de los Principios de la Convención se conservó la idea de que las medidas adoptadas para promover sus objetivos "no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional". Ahora bien, esos elementos de armonización no alteraban el hecho de que, en principio, cada AMUMA tenía su propio mecanismo de solución de diferencias, al igual que la OMC con arreglo a su Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias. Los AMUMA y la OMC eran jurisdicciones coexistentes y se plantearía la cuestión de determinar la jurisdicción aplicable si una de las partes en la controversia no fuera parte en el AMUMA cuya compatibilidad con la OMC debiera examinarse. Teóricamente, las partes podían convenir en renunciar a la competencia del AMUMA y de la OMC en favor de la Corte Internacional de Justicia, aunque esto no se aplicaba a la CITES. Su delegación favorecía el fortalecimiento del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), sin perjuicio del derecho de las partes a elegir el procedimiento de solución de conflictos. Esto debía llevarse a cabo mejorando las corrientes de información, considerando cuidadosamente la composición de los grupos especiales y estableciendo algunos criterios generales y pautas de conducta.

45. El representante de Nigeria preguntó si era necesario vincular los mecanismos de solución de diferencias de la OMC con los de los AMUMA o viceversa. Le interesaba saber si las controversias en virtud de los AMUMA, por ejemplo las controversias resultantes de denuncias formuladas por un Miembro en relación con quebrantamientos cometidos por otro, o la exigencia de cumplimiento de disposiciones de los AMUMA, podían plantearse ante la OMC. Sobre la base de la declaración de la delegación de Chile, preguntaba si se harían esfuerzos para integrar las jurisdicciones en los casos de superposición. El mecanismo mejorado de solución de diferencias de la OMC era claro. En las disposiciones para la solución de diferencias de los AMUMA se combinaba el uso de una amplia gama de métodos que iban desde la búsqueda no obligatoria de consenso, que incluía la negociación y la conciliación, hasta los arreglos judiciales. Se recurría mucho en los AMUMA a las medidas de aumento de la transparencia a fin de evitar los conflictos y los arreglos formales de las controversias. En la práctica, los datos sugerían que se procuraba inicialmente resolver las controversias entre las partes mediante consultas y negociaciones entre los interesados. Si esto fracasaba, las partes en una controversia podían recurrir a procedimientos de arbitraje judicial vinculante o a la Corte Internacional de Justicia. El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono era un buen ejemplo del enfoque flexible, con varias instancias, para la solución de diferencias en el ámbito de los AMUMA. Así pues, en la mayoría de los AMUMA había disposiciones de solución de diferencias que combinaban el consenso con la negociación y la consulta, la mediación y la conciliación, y un segundo sistema que preveía procedimientos de arbitraje legalmente obligatorios y arreglos judiciales.

46. En las observaciones contenidas en el documento PC/SCTE/W/4 se establecía: i) que las partes en los AMUMA no estaban obligadas a someterse a ningún procedimiento judicial de carácter obligatorio; ii) que había una renuencia general a recurrir a procedimientos de solución formal de controversias, aunque el cumplimiento hubiera sido incompleto; y iii) que no había ninguna institución central con el mandato de considerar las controversias ambientales, pese a que la Corte Internacional de Justicia había establecido en julio de 1993 una Cámara Especial integrada por siete miembros para ocuparse de las diferencias sobre cuestiones ambientales que se presentaran ante ella. Los AMUMA contenían entonces disposiciones apropiadas para la solución de diferencias y sus procedimientos vinculantes eran

similares a los mecanismos de la OMC. Sobre esta base, parecería innecesario buscar un vínculo formal entre los arreglos de solución de diferencias de los AMUMA y de la OMC. Podría haber situaciones más complejas, por ejemplo, cuando una parte agraviada en un AMUMA pudiera probar que otra parte había violado los derechos que le conferían los Acuerdos de la OMC. La solución de esta controversia con arreglo a la OMC sólo podía basarse en una clara violación de los derechos y obligaciones dimanantes de los Acuerdos de la OMC, de la que tanto el demandante como el demandado debían ser Miembros. No era realista que el demandante utilizara disposiciones de solución de controversias de un AMUMA o de la OMC contra un gobierno no parte.

47. La posición preliminar de su delegación era que los conflictos de intereses que llevaban al uso de procedimientos de solución de diferencias de los AMUMA no debían remitirse a los procedimientos de solución de diferencias de la OMC. Esta posición general era aún más defendible por el hecho de que no debía sobrecargarse a la OMC y de que se plantearían cuestiones de jurisdicción como, por ejemplo, si la OMC debería considerar las infracciones o las cuestiones de cumplimiento que se planteaban en el marco de los AMUMA, para lo cual deberían exponerse argumentos convincentes. Si se aceptaba la propuesta de la delegación de Chile, quedaría todavía por determinar por qué era necesario integrar las jurisdicciones cuando los AMUMA ya contenían disposiciones apropiadas.

48. El representante de Colombia dijo que los Miembros de la OMC debían conservar su legítimo privilegio de plantear cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con medidas ambientales con efectos sobre el comercio ante los mecanismos de solución de diferencias de la OMC. Aunque los AMUMA contenían disposiciones para la solución de conflictos, no todos esos conflictos tendrían repercusiones sobre el sistema de comercio. En los análisis de medidas ambientales, los Miembros de la OMC encontrarían que algunos conflictos deberían plantearse ante la OMC si era probable que hubiera efectos perjudiciales para el comercio.

49. El representante de los Estados Unidos dijo que la amplia gama de procedimientos de solución de diferencias de los AMUMA no parecían tan fuertes como los del ESD. En algunos aspectos, el ESD podría salir perjudicado en comparación con los mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA. Por ejemplo, en varios AMUMA se recurría a la Corte Internacional de Justicia, donde todas las audiencias eran públicas a menos que se decidiera otra cosa o que las partes en una controversia exigieran que el público no fuera admitido. Esto era pertinente y debería reflexionarse al respecto teniendo en cuenta las conclusiones a que había llegado la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su período de sesiones de 1994, en las que se indicaba lo siguiente:

"La Comisión pone de relieve la importancia de lograr una participación transparente, abierta y activa del público y de los expertos en la labor relativa al comercio y al medio ambiente, en particular en la labor realizada por la OMC, el PNUMA y la UNCTAD, así como en los procesos de solución de controversias. La Comisión reconoce la necesidad apremiante de progresar en esas esferas y aguarda con interés que los gobiernos y las organizaciones pertinentes elaboren recomendaciones concretas, de conformidad con el capítulo 38 del Programa 21."

50. Su delegación creía que las normas de la OMC se ocupaban más a fondo de cuestiones técnicas relacionadas con el comercio que podrían tener influencia en las políticas ambientales al mismo tiempo que estaban aumentando el número y el alcance de los AMUMA. En virtud del primer punto, se había concentrado la atención en los posibles conflictos entre la OMC y los AMUMA, precisamente donde podría haber oportunidades de sinergismo. Sería útil explorar los posibles mecanismos a través de los cuales un grupo especial de solución de diferencias de la OMC podría ser informado de las disposiciones de los AMUMA que pudieran ser pertinentes para su examen de las controversias, incluidas las interpretaciones y aplicaciones de un AMUMA, o los fallos sobre cuestiones ambientales internacionales de conformidad con los AMUMA. Su delegación consideraba que el proceso de solución de diferencias de la OMC se beneficiaría si los grupos especiales obtuvieran, en los casos apropiados,

asesoramiento experto sobre cuestiones ambientales, científicas y técnicas en los casos de diferencias relativas a aspectos ambientales y que era esencial que los procedimientos establecidos en el ESD para ese fin funcionaran en forma eficaz.

51. El representante de la Argentina dijo que los AMUMA incluían generalmente diversos mecanismos de solución de diferencias, que iban desde procedimientos no vinculantes de carácter consensual hasta el arbitraje y los procedimientos judiciales si las partes los habían aceptado previamente. Dado que los AMUMA se concentraban en mecanismos encaminados a evitar las controversias, se hacía hincapié en los mecanismos tendientes a mejorar la transparencia y la cooperación internacional. Pese a la preferencia por evitar las controversias, era probable que surgieran de todos modos algunos conflictos, dada la presión ambiental creciente causada por el crecimiento demográfico y las modalidades de consumo de las sociedades más industrializadas. Las diferencias en el seno de los AMUMA serían difíciles para la OMC, ya que era probable que se centraran en medidas comerciales contenidas en los AMUMA. En ese sentido, debía impedirse que las controversias ambientales se convirtieran en una carga adicional para el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC y evitarse que éste participara en la solución de los aspectos ambientales de los AMUMA. A este respecto, cabía mencionar dos principios generales: i) que los Miembros de la OMC podrían acordar, como norma general de conducta, que deberían agotarse los mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA antes de que pudiera plantearse una controversia ante el OSD; y ii) que los aspectos ambientales de las controversias deberían solucionarse en sus foros ambientales específicos.

52. El orador se preguntaba cuándo sería posible considerar que se había agotado un mecanismo de solución de diferencias de un AMUMA, ya que era frecuente que los AMUMA no se pronunciaran al respecto. Aún suponiendo que las partes en la controversia también fueran partes en el AMUMA, cabía imaginar que la parte que aplicaba una medida comercial, que frecuentemente podía ser la que tenía no sólo el derecho sino también la capacidad comercial de hacerlo, consideraría que no se habían agotado los mecanismos de solución de diferencias, en tanto que la parte afectada por la medida querría remitirla lo antes posible al OSD. Se preguntaba qué actitud debería adoptar el OSD cuando sólo una de las partes en el conflicto fuera parte en el AMUMA, ya que en ese caso no sería posible exigir que se agotaran los mecanismos de solución de diferencias del AMUMA antes de intervenir en la cuestión. Tampoco sería posible aplicar el segundo principio mencionado, ya que ningún AMUMA podría considerarse el foro ambiental específico. Era difícil responder a esto sin conocer los resultados de la labor del Comité sobre el primer punto. En consecuencia, su delegación consideraba que era dentro de ese punto donde sería posible establecer las disposiciones básicas para orientar la labor del OSD.

53. El Comité también podía tratar de encontrar posibles soluciones para los problemas que enfrentaría el OSD cuando debiera ocuparse de una de las siguientes posibilidades que parecían factibles en los casos de controversias. Cuando había solamente dos partes en una controversia, y suponiendo que ambas fueran Miembros de la OMC, podía ocurrir: i) que ambas fueran partes en el AMUMA en cuestión; o ii) que sólo una fuera parte en el AMUMA. En el primer caso, el principal problema consistía en determinar cuándo se habían agotado los mecanismos de solución de diferencias del AMUMA. Su delegación se preguntaba si podía fijarse un plazo para llenar esa laguna jurídica cuando se planteaba la cuestión al AMUMA interesado y éste guardaba silencio. En el segundo caso, los principales problemas consistían en cómo evitar que el OSD se viera envuelto en conflictos específicamente ambientales, si el grupo especial debería poder recabar una opinión científica y técnica, como estaba facultado a hacer con arreglo al párrafo 2 del artículo 13 del ESD, si esa opinión sería obligatoria para el OSD, si debería hacerse pública y a quién debería solicitarse. Su delegación consideraba que esta tarea analítica plantearía algunas cuestiones que ayudarían a la Secretaría a elaborar un documento en que se identificaran los principios generales que podrían surgir a raíz de los debates del Comité, y los problemas que podrían surgir en su aplicación, y que ese documento podría presentarse dentro del primer punto antes de la reunión de octubre.

54. El representante de las Comunidades Europeas creía que era necesario asegurar que cuando surgía una controversia relativa a medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente se tuvieran en cuenta los intereses y la especificidad del comercio y el medio ambiente y la necesidad de que uno no pusiera en peligro la satisfacción de los objetivos legítimos del otro. Al encarar la cuestión de las relaciones entre los procedimientos de solución de diferencias de los AMUMA y de la OMC, su delegación se había concentrado en la posible incertidumbre jurídica de una situación en que las partes en una controversia podrían recurrir, en ausencia de normas sobre competencia, a los procedimientos del AMUMA o de la OMC, o a ambos, en lo que solía denominarse la búsqueda del foro más conveniente. Su delegación pedía a la Secretaría que hiciera un análisis de esta cuestión. En su opinión, todavía no había surgido ningún caso de este tipo y los debates podrían resultar puramente teóricos. Sin embargo, dada la interacción cada vez más amplia entre las disciplinas relacionadas con el medio ambiente y con el comercio, la cuestión que se planteaba era cuál sería el mecanismo de solución de controversias que tendría competencia legal y cuál tenía los conocimientos técnicos necesarios para solucionar el conflicto. Su delegación consideraba que la tarea del Comité sería más fácil si se hubiera logrado un consenso sobre las normas que rigen las relaciones entre la OMC y los AMUMA en el primer punto y creía que los debates de procedimiento dentro del quinto punto se estaban llevando a cabo en ausencia de normas de fondo claras.

55. Podían preverse tres casos en los cuales una diferencia: i) se planteaba entre dos Estados partes en un AMUMA en relación con el cumplimiento de las prescripciones del AMUMA y se adoptaban medidas comerciales contra la parte que no cumplía esas prescripciones; ii) se planteaba entre una parte en un AMUMA y un Estado no parte en el AMUMA que era Miembro de la OMC; iii) se refería a cuestiones de comercio y medio ambiente pero el problema ambiental no estaba cubierto por ningún AMUMA, o ninguno de los Estados partes en la controversia era parte en un AMUMA existente relacionado con el problema ambiental específico. En este caso, la cuestión no se vinculaba directamente con la relación entre el mecanismo de solución de diferencias del AMUMA y la OMC sino que se refería a la capacidad en materia ambiental del OSD, que tenía sin duda competencia para juzgar en la cuestión.

56. En el primer caso, la cuestión consistía en determinar si una parte en un AMUMA tenía derecho a cuestionar las medidas comerciales adoptadas por otra parte en el AMUMA en la OMC, lo que guardaba relación con los principios del derecho internacional. Su delegación todavía no había desarrollado una posición al respecto, pero estaba considerando dos enfoques posible. El primero era que cabía aducir que las relaciones entre dos partes en un AMUMA constituían *res inter alios acta*. Cuando el AMUMA preveía la adopción de medidas comerciales para su funcionamiento efectivo, cabía considerar que los signatarios del AMUMA aceptaban en el acto de adhesión todos sus derechos y obligaciones, incluido el posible uso de medidas comerciales. En ese caso, la competencia para la solución de la controversia correspondería al AMUMA, dado que su *lex specialis* estaría por encima de la *lex generalis* de la OMC. En consecuencia, los AMUMA debían contar con mecanismos eficientes de solución de conflictos, cosa que no ocurría generalmente, ya que los mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA se caracterizaban por su naturaleza político-consensual que se concentraba en evitar los conflictos, y no en solucionarlos, y los procedimientos judiciales finales no eran generalmente obligatorios para ellos y sólo podían iniciarse si las partes involucradas convenían en ello. Además, el mecanismo de cumplimiento era generalmente débil en comparación con el de la OMC.

57. La debilidad de los mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA se explicaba por el hecho de que el derecho ambiental internacional se consideraba un conjunto de leyes sin fuerza obligatoria. Sin embargo, cuando el derecho ambiental adoptaba la forma de un AMUMA, desarrollado a través del consenso internacional, sus partes debían estar preparadas para asignarle las facultades judiciales y de cumplimiento necesarias para asegurar su acatamiento y el logro de su objetivo ambiental. Podría prestarse atención al fortalecimiento de los mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA

existentes y futuros a fin de reducir el riesgo de que cuando surgieran conflictos comerciales entre las partes en un AMUMA éstas tuvieran que recurrir a la OMC por falta de disposiciones bien establecidas, eficientes y exigibles en los AMUMA. Esta cuestión no recaía probablemente dentro del ámbito de competencia de la OMC; podría pedirse al PNUMA que elaborase directrices para la solución de las controversias relacionadas con los AMUMA. A fin de asegurar que se tuviera en cuenta la especificidad de los intereses comerciales del demandante y fomentar el necesario intercambio interdisciplinario de conocimientos, podrían preverse arreglos en virtud de los cuales, en el caso de una controversia relacionada con el comercio entre dos partes en un AMUMA, se proporcionarían los conocimientos comerciales necesarios al mecanismo de solución de diferencias del AMUMA mediante la cooperación con la OMC.

58. El segundo enfoque del primer caso implicaba que cuando surgía una controversia debido a la adopción por una parte en un AMUMA de medidas comerciales contra otra parte, nada impediría al demandante iniciar procedimientos de solución de diferencias en la OMC. La OMC era la institución que regía el comercio internacional y tenía competencia para juzgar en todo conflicto relacionado con restricciones comerciales, cualquiera fuera su objetivo. La competencia "exclusiva" de la OMC podría modificarse mediante el establecimiento de disposiciones de cooperación apropiadas entre la OMC y el órgano competente del AMUMA, a fin de asegurar que se tuviera en cuenta el objetivo ambiental del AMUMA en el arreglo de la controversia. Era difícil delinear normas generales de principio que evitaran la incertidumbre legal relacionada con la competencia para la solución de conflictos entre los AMUMA y la OMC cuando la controversia se planteaba entre dos partes en un AMUMA. Un enfoque pragmático podría consistir en encarar la cuestión caso por caso; las partes que negociaban un AMUMA estipularían entonces *a priori* en el AMUMA si era su intención resolver las posibles diferencias con otras partes en el AMUMA dentro del ámbito de ese acuerdo.

59. En el segundo caso, si una parte en un AMUMA consideraba que la acción de un Estado que no era parte en él menoscababa los objetivos ambientales del AMUMA y adoptaba medidas comerciales contra ese Estado no parte, el foro competente para la solución de la controversia era la OMC. En ese caso, al igual que en el segundo enfoque examinado en el caso anterior, podían preverse dos posibilidades dependiendo de las normas sobre las cuales el Comité llegara a un consenso dentro del primer punto. La primera era que el Comité llegara a un consenso sobre el primer punto y se aceptaran las recomendaciones formuladas a la Conferencia Ministerial, en virtud de las cuales se otorgaría una forma de exención al escrutinio por la OMC de las medidas comerciales adoptadas de conformidad con el AMUMA. La segunda posibilidad era que no se llegara a un consenso, y las medidas comerciales adoptadas de conformidad con los AMUMA no se beneficiarían en ese caso de ningún trato especial en la OMC.

60. La primera posibilidad considerada tendría como consecuencia la elaboración de normas apropiadas para el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, en virtud de las cuales la parte que adoptara la medida comercial podría reclamar una excepción. Con arreglo a la segunda posibilidad, cuando se planteara un conflicto entre una parte en un AMUMA y un Estado no parte en un AMUMA, la OMC, en calidad de foro competente para el arreglo de la controversia, consideraría las normas y procedimientos vigentes. Su delegación consideraba que en el proceso de solucionar un conflicto resultante de la adopción de medidas comerciales de conformidad con un AMUMA podría tenerse debidamente en cuenta el objetivo ambiental del AMUMA para el cual se habían adoptado las medidas comerciales. En este caso, podrían hacerse arreglos especiales para la cooperación y la consulta entre el AMUMA y la OMC.

61. El tercer caso no se relacionaba directamente con el quinto punto, pero su delegación consideraba oportuno encararlo, dado que era en el quinto punto donde podría surgir un debate concentrado en el arreglo de controversias en la OMC. Cuando se examinaba la necesidad de asegurar la integración de consideraciones ambientales en una controversia comercial, su delegación era consciente de que

la principal crítica de la comunidad ambiental era que el ESD hacía referencia al derecho de los grupos especiales a recabar información, incluso de especialistas en cuestiones del medio ambiente. El orador señalaba que sería esencial contar con conocimientos especializados sobre el medio ambiente para determinar la necesidad de una medida comercial relacionada con el medio ambiente y que la evaluación de las pruebas técnicas, solicitadas en apoyo de ciertas medidas comerciales, exigiría conocimientos ambientales y técnicos y destacó la importancia de las mejoras del sistema de solución de diferencias en términos de certidumbre jurídica, claridad de las normas, transparencia y eficacia. Sin embargo, dada la sensibilidad y la superposición creciente de las políticas ambientales y comerciales, su delegación consideraba que las normas actuales sobre conocimientos especializados pertinentes en los grupos especiales de la OMC debían interpretarse en el sentido de asegurar que se contara con conocimientos especializados sobre el medio ambiente cuando el conflicto se relacionaba con cuestiones ambientales.

62. La representante de Suiza dijo que las restricciones al comercio podrían ser un elemento importante de algunos AMUMA a fin de alcanzar objetivos ambientales concretos o para hacer cumplir las obligaciones en virtud del AMUMA. En ese sentido, existía una superposición entre el comercio y el medio ambiente y aumentarían las posibilidades de conflicto. Dado que era conveniente promover un desarrollo coherente de las políticas ambientales y comerciales y evitar los conflictos, era preciso adoptar normas y mecanismos eficaces dentro de los AMUMA y en la OMC a fin de solucionar esos conflictos. La OMC y los AMUMA preveían mecanismos concretos de solución de controversias que eran equivalentes en términos del derecho internacional. Los AMUMA preveían mecanismos como la consulta, la mediación, la conciliación o el arbitraje, generalmente de carácter no obligatorio, para solucionar los conflictos sobre cuestiones ambientales. Sin embargo, los AMUMA se basaban en la cooperación para lograr objetivos generales y no especificaban en detalle las obligaciones, con lo que resultaba difícil exigir su cumplimiento. Tal vez esa fuera la razón por la cual los conflictos dentro de los AMUMA habían sido raros. Sin embargo, había normas obligatorias sobre comercio multilateral relativas a procedimientos de solución de controversias, como la transparencia como elemento para la gestión de una controversia, la consulta, la conciliación, la mediación y el arbitraje. El mecanismo de solución de diferencias de la OMC se consideraba uno de los elementos fundamentales del sistema de la OMC y se describía en la Decisión de 1989 sobre mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT como un elemento central para dar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio.

63. Los dos diferentes sistemas de solución de diferencias tenían principios comunes, como la preferencia dada a las soluciones negociadas mediante la consulta, la mediación y la conciliación. Sin embargo, el tratamiento de obligaciones en conflicto en virtud de la OMC y los AMUMA podría dar lugar a dificultades. Su delegación quería concentrarse en la determinación de si los mecanismos de solución de diferencias existentes de la OMC eran suficientes para resolver las controversias comerciales y ambientales o si era preciso modificar esas disposiciones a fin de evitar los conflictos resultantes de la superposición de ambos sistemas. Su delegación no estaba en condiciones de dar respuesta a estas cuestiones, pero quería indicar cómo podría proceder el Comité en su análisis.

64. En lo concerniente a los aspectos institucionales de los mecanismos de solución de diferencias de la OMC, una cuestión que podría explorarse era la forma de encarar un conflicto que entrañaba una medida compatible con un AMUMA pero contraria a las normas de la OMC. Su delegación se preguntaba si era necesario establecer nuevos arreglos institucionales, como una institución superior, que podría juzgar los conflictos entre las políticas comerciales y ambientales, o si sería preferible elaborar soluciones pragmáticas sobre la base de los mecanismos existentes. La respuesta dependería de los resultados alcanzados en los trabajos del Comité y en otros foros internacionales. Con respecto a los aspectos procesales del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, se preguntaba si las disposiciones existentes preveían una utilización suficiente de expertos en cuestiones ambientales capacitados para juzgar controversias comerciales y ambientales. En virtud de los Acuerdos de la OMC, cabía adoptar una gama de medidas relacionadas con el comercio para lograr objetivos ambientales,

siempre que esas medidas fueran no discriminatorias, transparentes y proporcionales. La evaluación de la proporcionalidad de una medida podía ser contenciosa, incluso en lo que respecta a si restringía el comercio más que lo necesario para satisfacer un objetivo ambiental legítimo, y teniendo en cuenta los riesgos de falta de cumplimiento. La evaluación de la proporcionalidad y la necesidad de una medida comercial basada en un objetivo ambiental convenido de un AMUMA era un ejemplo en este sentido.

65. De conformidad con el ESD, los grupos especiales estaban facultados para considerar todos los derechos y obligaciones pertinentes de las partes interesadas y para tener en cuenta los acuerdos abarcados que proporcionaban un panorama global de las disposiciones diversas y a veces en competencia del sistema. Si los integrantes de los grupos especiales no eran expertos en cuestiones ambientales, podían obtener asesoramiento experto en esta materia de conformidad con el artículo 13. Era interesante saber cómo se aseguraría que un grupo especial recabara el asesoramiento de expertos cuando fuera necesario, y si la decisión estaría a cargo del grupo especial o deberían elaborarse directrices para definir las situaciones en que sería preciso solicitar ese asesoramiento. Dado que la OMC no tenía experiencia en materia de controversias sobre obligaciones conflictivas en virtud de la OMC y de los AMUMA, no había una interpretación jurídica de los AMUMA en cuestión. Sobre la base del texto presentado por Chile, podría ser útil analizar la Convención sobre el Derecho del Mar, que traspasaba la competencia en todas las cuestiones relacionadas con subvenciones y prácticas comerciales restrictivas al GATT.

66. El representante de Noruega dijo que los AMUMA contenían diversas formas de mecanismos de solución de diferencias y hasta el momento se había hecho hincapié en evitar las controversias mediante el intercambio de información, la vigilancia, la información y la inspección. En consecuencia, no se incluían generalmente en los AMUMA procedimientos obligatorios de solución de conflictos. Su delegación consideraba que la cooperación internacional, en particular a través de los AMUMA, era reconocida como la forma más eficaz de solucionar los problemas ambientales globales y transfronterizos. En este sentido, era probable que se negociaran dentro del marco de los AMUMA disposiciones para el uso de medidas comerciales con fines ambientales, lo que podría implicar que un número creciente contendría medidas comerciales. Esto planteaba la necesidad de encarar la relación entre los mecanismos de solución de diferencias de la OMC y de los AMUMA.

67. En el primer caso, se planteaba un conflicto entre partes en un AMUMA y en la OMC en que una parte aducía que sus medidas comerciales eran legítimas en virtud del AMUMA en tanto que la otra, cuyos intereses se veían afectados por las medidas comerciales, sostenía que se habían violado sus derechos en virtud de la OMC. A fin de resolver el conflicto dentro del ámbito del AMUMA, su delegación consideraba que los procedimientos de solución de diferencias del AMUMA debían ser claros y vinculantes. Nada impedía a las partes en un AMUMA prever que los conflictos relacionados con su aplicación e interpretación se solucionarían dentro del ámbito del AMUMA. De esa manera, las partes estarían obligadas por las disposiciones de solución de diferencias del AMUMA, como había indicado la delegación de Chile, aunque en un sentido diferente. En el segundo caso, una de las partes era parte en un AMUMA y en la OMC en tanto que la otra solamente era parte en la OMC. En este caso, las disposiciones de la OMC serían aplicables si una parte así lo solicitaba. En este sentido, estaba de acuerdo con las delegaciones de la Argentina y de las Comunidades Europeas en cuanto a que la cuestión del arreglo de las controversias estaba vinculada al resultado de los trabajos sobre el primer punto.

68. Su delegación consideraba que la interpretación colectiva del artículo XX era una forma apropiada de reglamentar las relaciones entre los AMUMA y la OMC para reducir el riesgo de conflictos. Si se planteaba una controversia ante la OMC, las disposiciones del ESD preveían la obtención de asesoramiento de expertos sobre el medio ambiente. Esas disposiciones consistían en enfoques generales y no daban directrices para asegurar que se obtuviera ese asesoramiento. Era importante obtener el asesoramiento de expertos en cuestiones ambientales en las controversias relacionadas con el medio ambiente y podría establecerse un sistema automático para la participación de expertos ambientales

y órganos de los AMUMA. Esto debería tratarse en el seno del Comité. Una solución posible podría ser una "ventanilla" ambiental con arreglo al artículo XX que incluyera una referencia a la necesidad de obtener el asesoramiento de expertos en cuestiones ambientales en conexión con las controversias. Cuando se plantearan conflictos comerciales relacionados con el medio ambiente fuera de un AMUMA también podría recabarse el asesoramiento de expertos.

69. El representante de Hong Kong no consideraba que correspondía al Comité ocuparse de los mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA ni de su mejora. Ello no promovería el reconocimiento de que la OMC no tenía competencia para determinar si las políticas ambientales eran apropiadas o adecuadas. El Comité debía considerar el arreglo de controversias en el contexto de la superposición entre el comercio y el desarrollo, especialmente cuando en los AMUMA se preveían medidas comerciales que, en algunas circunstancias, estarían en violación de las obligaciones de la OMC. En caso contrario, la OMC podría utilizarse para apoyar los AMUMA, o se utilizarían los procedimientos de solución de diferencias de la OMC para aplicar disposiciones de los AMUMA, lo que era inútil.

70. Los análisis hechos por las delegaciones de las Comunidades Europeas, la Argentina, Noruega y Suiza deberían examinarse en el Comité en una etapa posterior. Un punto que debía aceptarse era que no era posible ocuparse de la solución de controversias sin aclarar las normas de fondo. La idea de permitir que participaran expertos en cuestiones ambientales en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC era positiva. Por ejemplo, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) había una interfaz evidente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y podía solicitarse el asesoramiento de expertos sobre propiedad intelectual en una controversia. Aunque era algo remoto pensar en una controversia relacionada con el Acuerdo ADPIC, se había considerado necesario crear una lista de miembros de grupos especiales para los conflictos relacionados con los ADPIC. Sin embargo, el Comité debía esperar hasta saber qué hacer con respecto al primer punto y contar con experiencia en la utilización del OSD.

71. Había un conjunto de Acuerdos de la OMC que institucionalizaban el intercambio de compromisos y los Miembros estaban obligados a respetarlos, ya que habían renunciado voluntariamente a algunos de sus derechos a cambio de otros, incluido el derecho de utilizar sanciones comerciales a menos que estuvieran cubiertas por las excepciones de la OMC. Por noble que fuera el objetivo de una medida de política, ella no justificaba una violación. La jurisprudencia del GATT/OMC consideraba que la carga de la prueba recaía sobre la parte que invocaba una excepción y en los procedimientos de solución de diferencias del GATT se había aceptado generalmente que siempre que pudiera demostrarse que una medida era incompatible, se suponía que había habido anulación y menoscabo de ventajas. Su delegación consideraba que esos elementos del sistema de solución de conflictos eran mecanismos de solución de diferencias de los AMUMA y que podían no ser compatibles con la OMC. En todo caso, no creía que el Comité debiera profundizar más al respecto en esta etapa, ya que la solución de conflictos no era una prioridad. En primer lugar, debía tratarse en forma sustantiva el primer punto. A continuación se necesitaba un entendimiento común de los conceptos antes de que fuera posible examinar los aspectos procesales y realizar cambios fundamentales en el sistema largamente negociado de solución de diferencias de la OMC.

72. El representante de Australia dijo que los debates con arreglo al quinto punto eran importantes para colocarlo en el contexto de las consideraciones más amplias incluidas en el primer punto y que los trabajos sobre la solución de diferencias debían avanzar a la par de las deliberaciones sobre los AMUMA, como habían señalado las delegaciones de la Argentina, las Comunidades Europeas y otras. La experiencia en el uso de los procedimientos de solución de controversias de los AMUMA debía encararse teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los AMUMA se basaban en obligaciones generales para lograr objetivos ambientales amplios. En contraste con esto, la OMC establecía derechos y obligaciones contractuales concretos entre sus Miembros. Las diferencias entre los mecanismos de

solución de conflictos de los AMUMA y de la OMC reflejaban esas diferencias. Sin embargo, había varias similitudes entre los dos mecanismos de solución de conflictos, tales como: i) las obligaciones de transparencia y notificación desempeñaban un papel importante como medio de evitar los conflictos y vigilar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones; ii) el objetivo de la solución de conflictos era lograr soluciones mutuamente aceptables para las partes en una controversia que fueran compatibles con el régimen jurídico pertinente; iii) este objetivo de los sistemas de solución de diferencias de la OMC y de los AMUMA se reflejaba en el énfasis en las consultas entre las partes en una controversia como primera etapa necesaria para la solución de las controversias y a fin de lograr una solución mutuamente satisfactoria; y iv) ambos mecanismos contenían disposiciones sobre buenos oficios, conciliación y mediación como forma de solucionar las controversias.

73. Podía haber diferencias entre la OMC y la mayoría de los AMUMA si no era posible resolver la controversia mediante estas primeras medidas. La OMC contenía disposiciones detalladas sobre el establecimiento y el funcionamiento de un grupo especial cuyos miembros prestaban servicios en calidad de expertos individuales para examinar imparcialmente los hechos y la aplicabilidad de los Acuerdos pertinentes de la OMC y comunicar sus conclusiones a los Miembros de la OMC representados en el OSD. En contraste con esto, los AMUMA podían prever el arbitraje por un tribunal arbitral establecido con arreglo a procedimientos previstos en el AMUMA, o por un órgano externo como la Corte Permanente de Arbitraje o la Corte Internacional de Justicia, pero solamente si ambas partes en la controversia convenían en ello. En ambos casos, los AMUMA incluían disposiciones para la conciliación por órganos establecidos por ellos.

74. Su delegación quería señalar algunas de las cuestiones que merecían considerarse dentro del quinto punto, teniendo en cuenta las declaraciones formuladas por Chile, la Argentina, las Comunidades Europeas y otras delegaciones. Una de ellas era la cuestión del mecanismo de solución de diferencias que debía utilizarse en caso de conflicto entre dos partes que eran Miembros de la OMC y partes en un AMUMA con respecto a una cuestión que guardaba relación con obligaciones en virtud de la OMC y del AMUMA. Si un gobierno era parte en la OMC y en el AMUMA, cabía suponer que trataría de cumplir sus obligaciones en virtud de cada uno de los acuerdos de la manera más compatible posible con sus obligaciones en virtud del otro. Era importante que los gobiernos, al adoptar cualquier medida, la examinaran a fondo teniendo en cuenta todas sus obligaciones internacionales; esto contribuiría a evitar los conflictos. Pero era también importante que otros países que fueran partes en un AMUMA y Miembros de la OMC examinaran las medidas adoptadas por otro país que pudieran interesarles en el contexto de todas las obligaciones internacionales entre los dos países. A este respecto, era pertinente señalar que el artículo 3 del ESD disponía que los Miembros, antes de presentar una reclamación, debían reflexionar sobre la utilidad de actuar al amparo de los procedimientos de solución de diferencias.

75. Si se planteaba una diferencia entre dos gobiernos con respecto a sus obligaciones en virtud de la OMC y de un AMUMA, correspondía inicialmente al demandante determinar si debía presentar la reclamación ante la OMC o el AMUMA, cosa que se determinaría con arreglo a su evaluación de si se habían quebrantado principalmente sus derechos en virtud de la OMC o del AMUMA. En ambos casos, el recurso inicial a un mecanismo de solución de diferencias entrañaba consultas bilaterales entre las partes en la controversia. Cualquiera fuera el foro en el que se planteaba la demanda, esas consultas brindaban una oportunidad para que las partes discutieran sus opiniones sobre todos los aspectos y proporcionaban la base para una solución mutuamente satisfactoria. Se habían solucionado más conflictos del GATT mediante consultas bilaterales que en los procedimientos formales de grupos especiales.

76. Si una controversia no podía resolverse en la etapa de consultas, cabía considerar los buenos oficios, la mediación y la conciliación. Si la controversia se refería a las relaciones entre las obligaciones que habían asumido los gobiernos en virtud de acuerdos internacionales separados, había argumentos a favor de explorar a fondo una solución negociada. Una cuestión que valía la pena considerar era si debía ser importante que las consultas bilaterales o la interposición de buenos oficios, la mediación

o la conciliación se llevaran a cabo bajo los auspicios de la OMC y no del AMUMA, o viceversa. Era pertinente a este respecto el hecho de que los procedimientos de la OMC entrañaban obligaciones sobre el plazo dentro del cual los Miembros debían responder a una solicitud de consultas. Además, los procedimientos de la OMC contenían disposiciones importantes en materia de transparencia que requerían la notificación de las solicitudes de consultas y preveían que otros Miembros con intereses comerciales sustanciales se sumaran a las consultas.

77. Si una controversia que se había planteado ante la OMC no pudiera resolverse mediante consultas o esfuerzos de mediación y el demandante solicitaba el establecimiento de un grupo especial, se planteaban varias cuestiones. La OMC podía adoptar el parecer de que una controversia entre sus Miembros que eran también partes en un AMUMA debía encararse dentro del AMUMA, a menos que este último hubiera determinado que la medida no estaba cubierta por las disposiciones del AMUMA. Sin embargo, se preguntaba qué pasaría si el AMUMA no tuviera procedimientos de solución de diferencias, o si no resultaba capaz de llegar a una determinación. El OSD, con el consentimiento de las partes en la controversia, podría elaborar un mandato que facultara a un grupo especial a considerar las disposiciones pertinentes del AMUMA y, en el cumplimiento de ese mandato, el grupo especial podría obtener información y asesoramiento técnico del AMUMA. Los grupos especiales podrían solicitar ese asesoramiento incluso cuando no estuvieran explícitamente obligados a hacerlo en virtud de su mandato. El uso de un grupo de examen de expertos era un medio más de obtener asesoramiento pertinente sobre el medio ambiente u otros aspectos de un caso.

78. Debían considerarse cuidadosamente las consecuencias y el objetivo de incluir en el mandato una indicación de que un grupo especial debería tener en cuenta las disposiciones de un AMUMA. La función de los grupos especiales, según se describían en el ESD, era "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados". La interpretación de las disposiciones de otro acuerdo intergubernamental no parecía estar dentro del ámbito de las funciones de un grupo especial ni de la OMC y sus procedimientos de solución de diferencias. Pero sí estaría dentro de la competencia de la OMC determinar si las acciones de sus Miembros realizadas de conformidad con otro acuerdo estaban en conflicto con las disposiciones de la OMC. El orador preguntaba si un grupo especial podría solicitar del órgano apropiado de un AMUMA asesoramiento sobre la interpretación de las disposiciones del AMUMA, incluso sobre si una medida determinada estaba en conformidad con esas disposiciones.

79. Debían tenerse también en cuenta las circunstancias en que la OMC podría proporcionar asesoramiento para contribuir a la solución de controversias en un AMUMA, por ejemplo si un AMUMA incluía disposiciones que se referían explícitamente a derechos y obligaciones con arreglo a la OMC. Otra posibilidad sería que un AMUMA contuviera obligaciones, por ejemplo, sobre trato no discriminatorio, tal vez utilizando el lenguaje de la OMC. Sería interesante saber si cabía la posibilidad de que la OMC ayudara a las partes en un AMUMA a interpretar y aplicar ese tipo de disposiciones en relación con medidas comerciales y relacionadas con el comercio. Además, en el ESD se preveía explícitamente que el objetivo del sistema de solución de diferencias de la OMC era preservar los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC, y que las recomendaciones y resoluciones del OSD no podían entrañar el aumento o la reducción de esos derechos y obligaciones.

80. La representante del Uruguay consideraba que el problema básico era que podría haber en el futuro conflictos de jurisdicción que deberían resolverse a fin de evitar el riesgo de búsqueda del foro más conveniente. Su delegación consideraba que una condición previa que debía tenerse en cuenta era que cualquier instrumento jurídico que establecía un mecanismo de solución de diferencias, ya fuera el ESD o el AMUMA, establecía la cobertura del mecanismo. En el artículo 1 del ESD se indicaba que las normas y procedimientos de solución de diferencias se aplicarían sobre la base de las disposiciones

sobre solución de diferencias de los acuerdos abarcados en el ESD, que no eran acuerdos sobre el medio ambiente. Esto implicaba que el sistema de solución de diferencias de la OMC tenía una competencia específica para la solución de todos los conflictos relacionados con los derechos y obligaciones que tenían los Miembros de la OMC en virtud de esos acuerdos. Así pues, su delegación estaba de acuerdo con la delegación de Hong Kong en el sentido de que era necesario limitar los debates a los casos en que los AMUMA incluían medidas comerciales que pudieran menoscabar los derechos de los Miembros de la OMC. También era claro que el ESD no podría hacer determinaciones sobre cuestiones estrictamente ambientales porque sólo podría considerar los casos en que un Miembro de la OMC encontrara que sus derechos resultantes de los Acuerdos de la OMC habían sido anulados o menoscabados; los AMUMA no estaban abarcados en la OMC.

81. El representante del Brasil consideraba que había una relación intrínseca entre los debates con arreglo al quinto punto y al primer punto y señaló que la delegación del Uruguay había introducido un concepto interesante al recordar que el ámbito de aplicación del ESD había sido claramente limitado a los Acuerdos de la OMC. En consecuencia, la cuestión no era la relación entre diferentes mecanismos de solución de controversias sino la relación entre diferentes acuerdos. Cuando un Miembro recurría al procedimiento del ESD, la situación se examinaba a la luz de las normas de la OMC. Pero la cuestión consistía entonces en conocer la relación entre las normas de la OMC y los AMUMA, cosa que estaba incluida en el primer punto. Su delegación había apoyado anteriormente la idea de contar con una interpretación del artículo XX y veía los beneficios de combinar soluciones *a priori* y *a posteriori*. Pero parte del proceso de definir criterios para facilitar las relaciones entre la OMC y los AMUMA era la cuestión de la solución de diferencias. El orador preguntaba cómo podría examinarse la solución de diferencias en los AMUMA que eran "candidatos" para un tratamiento especial con arreglo a la OMC dentro del primer punto.

82. Tras examinar el quinto punto, algunas delegaciones cuestionaban el proceso de solución de diferencias de la OMC, y personalmente estaba de acuerdo con la delegación de Hong Kong en cuanto a que la manera en que funcionaba el ESD o el procedimiento de solución de diferencias de la OMC no debía formar parte del debate. En su opinión, no competía a la OMC juzgar cuestiones ambientales, y el proceso de solución de diferencias entrañaba en cambio un juicio sobre la compatibilidad de la medida del AMUMA con las reglas de la OMC. A este respecto, cualquier experto cuya opinión fuera recabada por un grupo especial de la OMC ayudaría a éste a entender de qué se trataban las medidas y no a juzgar si esas medidas eran compatibles con la OMC, o siquiera compatibles con los AMUMA. Haciendo un paralelo con lo que se había dicho sobre la transparencia, donde se había señalado que las medidas ambientales no debían estar sometidas a obligaciones de transparencia más estrictas que otras medidas y que las obligaciones de transparencia no guardaban relación con el objetivo de la medida, consideraba que el procedimiento de solución de diferencias ofrecía la posibilidad de solicitar la opinión de expertos, pero que no había ninguna razón para particularizar a los expertos ambientales ni a las cuestiones a este respecto.

83. La representante del Canadá hizo algunas observaciones preliminares que eran coherentes con las declaraciones de las delegaciones del Brasil y de Hong Kong. Su delegación estaba de acuerdo con la sugerencia de que las dos posibilidades básicas eran que surgiera una controversia entre Miembros de la OMC en que ambas partes fueran partes en un AMUMA, o una controversia entre Miembros de la OMC en la que sólo una fuera parte en el AMUMA en cuestión. En el primer caso, la cuestión planteada por la delegación de Australia en relación con la necesidad de evitar futuros conflictos era importante para su propia delegación; los gobiernos debían tener en cuenta sus responsabilidades a fin de evitar la creación de conflictos entre dos o más tratados que habían firmado. La mejor forma de evitar que surgieran conflictos con respecto a las obligaciones en virtud de los AMUMA y de la OMC entre países que eran partes en ambos era considerar la cuestión en oportunidad de la negociación y la redacción de esos tratados. Sin embargo, podía haber casos en que surgieran desacuerdos en virtud de un AMUMA. Su delegación estaba de acuerdo en que en el primer caso esto debía tratarse con arreglo al AMUMA porque entrañaría disposiciones del AMUMA.

84. Los AMUMA se beneficiarían de la adopción de mecanismos mejorados de solución de conflictos y del establecimiento de obligaciones y disposiciones más claras. Sin embargo, no era su intención sugerir que no podía plantearse un caso en que podrían surgir controversias que entrañaran derechos y obligaciones con arreglo a la OMC. Podría haber problemas en cuanto a cuál sería el mejor foro para tratar una controversia de esa índole; a esta altura no resultaba evidente para su delegación si sería posible y necesario que el Comité tratara de establecer normas prescriptivas para determinar *a priori* qué enfoque debería adoptarse en un caso dado. Incluso la sugerencia de la delegación de la Argentina de convenir en que se agotaran todos los recursos con arreglo al AMUMA antes de recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC daba lugar a la cuestión de si era conveniente que los derechos y obligaciones de la OMC se consideraran en otros foros, como ocurriría por ejemplo cuando un AMUMA previera que las controversias se sometieran a la Corte Internacional de Justicia. La oradora consideraba que no había un enfoque estándar que sería apropiado en todos los casos futuros posibles.

85. En el segundo caso, si el Estado que no era parte en el AMUMA consideraba que habían resultado adversamente afectados sus derechos y obligaciones con arreglo a la OMC, estaba plenamente facultado para plantear la reclamación ante la OMC. Esta era la simple realidad jurídica y la única forma de limitar el acceso a esos derechos era posiblemente mediante los procedimientos de renuncia o excepción que el Comité podría examinar dentro del primer punto. Su delegación apoyaba a los que habían indicado que el primer punto debía considerarse en el caso de los Estados no partes en los AMUMA.

86. En cualquiera de estos casos, un grupo especial de la OMC debería considerar las disposiciones de la OMC y ese sería el único ámbito compatible con la competencia y el mandato del OSD. En algunos casos, podría haber disposiciones en los Acuerdos de la OMC, por ejemplo, disposiciones de excepción, en que podrían tener importancia las medidas ambientales relacionadas con el comercio, y en ese caso podría haber cuestiones de hecho relativas a programas ambientales que podrían ser aplicables. Estaba de acuerdo con la delegación del Brasil en que los puntos sobre los cuales los grupos especiales obtendrían el asesoramiento de expertos no serían los objetivos ambientales ni las políticas ambientales *per se* sino más bien la relación de la medida comercial propiamente dicha con el programa o el objetivo ambiental. Pero en los casos en que no había ninguna disposición en un Acuerdo de la OMC que guardara relación con la medida, se preguntaba cuáles podrían ser las consideraciones ambientales. Se preguntaba en particular sobre qué base examinaría un grupo especial de la OMC los objetivos o las disposiciones de un AMUMA. Parecía haberse convenido en debates anteriores que la OMC no trataría de determinar cuáles eran los objetivos de los AMUMA, ya que no tenía competencia para interpretar las disposiciones de otros tratados. Especialmente en el caso de las medidas adoptadas contra Estados no partes, esto podría implicar que los derechos de la OMC serían una función de la calidad de miembro o la falta de calidad de miembro de otros tratados que se referían a esferas de política diferentes. En ese sentido, consideraba que debían tenerse presentes el mandato y la competencia de los órganos de la OMC y que la interpretación de los AMUMA o el juicio de los objetivos de las políticas ambientales debería estar dentro de la competencia de la OMC.

87. El representante de la India recordó que cuando se negociaron los términos de referencia del Comité, su delegación había expresado reservas sobre este tema particular. Había tomado nota de todas las observaciones formuladas y quería hacer solamente observaciones preliminares. Con respecto a la comparación entre los procedimientos de solución de diferencias de los AMUMA y los de la OMC, un AMUMA, por definición, contenía un conjunto complejo de obligaciones, incluida la asistencia financiera. No quería sugerir entonces que un conjunto de obligaciones de un AMUMA podría transferirse a un foro adecuado y adaptarse a las necesidades de una situación particular. Esto dejaría de lado un conjunto específico y bien definido de situaciones que podrían ser las que se planteaban en la OMC. Su delegación apoyaba a las delegaciones del Brasil, Hong Kong y Canadá y consideraba que, si se trataba solamente de Estados no partes, la cuestión debía tratarse en consecuencia. Estaba de acuerdo en que este punto estaba vinculado con el primer punto. Con respecto a las cuestiones

planteadas sobre los procedimientos del ESD, tenía serias reservas contra la introducción de cambios. Como había señalado la delegación del Brasil, había muchas nuevas esferas cubiertas por el ESD que habían sido ratificadas recientemente por los gobiernos. Además, consideraba que correspondía a los grupos especiales juzgar las controversias y que el ESD proporcionaba directrices claras sobre la forma en que esos grupos especiales debían llevar a cabo su labor.

Punto 10 del programa de trabajo:

Disposiciones apropiadas que han de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales a las que se hace referencia en el artículo V del Acuerdo sobre la OMC

88. El Presidente recordó que el Consejo General de la OMC se estaba reuniendo a nivel de jefes de delegaciones y se estaban realizando consultas para examinar las disposiciones que habían de adoptarse sobre la relaciones con las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sugirió que el Comité se ocupara de este punto después de que se llegara a una conclusión en esas consultas.

89. El representante de los Estados Unidos apoyó la propuesta del Presidente y subrayó la importancia que asignaba su delegación a esta cuestión.

90. El representante de Egipto dijo que la contribución de las ONG a la labor del Comité revestía gran importancia y enriquecería sus debates. Se habían hecho varias sugerencias sobre la manera en que debería tratarse con las ONG en lo relativo a cuestiones comerciales y ambientales. Algunas delegaciones habían sugerido que las contribuciones de esas organizaciones podrían considerarse a través de la Secretaría y otros proponían que se organizaran reuniones informales con las ONG. Su delegación creía que esas sugerencias no eran suficientemente amplias y que las delegaciones sacarían provecho de escuchar directamente en las reuniones a un número seleccionado de ONG que se ocupaban del comercio y el medio ambiente, aunque esas organizaciones no deberían asistir necesariamente a todas las reuniones. Podría estudiarse una lista de ONG especializadas, o que tuvieran un interés directo en el comercio y el medio ambiente, y podría entonces invitarse a unas pocas de entre ellas a las reuniones del Comité. Si esto fuera aceptable, podría darse acceso a las reuniones a los representantes de las ONG y éstos podrían posiblemente contribuir a los debates e intercambiar opiniones.

91. Se convino en aplazar el examen del décimo punto en espera del resultado de los debates en el Consejo General.

Punto 7 del programa de trabajo:

La cuestión de las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen

92. El representante de Nigeria recordó que en la última reunión 19 delegaciones habían expresado sus opiniones sobre la cuestión de las mercancías prohibidas en el país de origen. Su delegación se había sentido alentada por las observaciones constructivas que se habían formulado y consideró que había consenso entre las delegaciones en el sentido de examinar esta cuestión a partir del punto al que se había llegado en el proyecto de Decisión de 1991, teniendo al mismo tiempo en cuenta los acontecimientos recientes. Propuso que el Comité volviera a ocuparse de este punto después del debate sobre el sexto punto en la reunión de septiembre.

93. Los representantes de Egipto, el Senegal y los Estados Unidos apoyaron la solicitud de Nigeria de encarar la cuestión de las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen en septiembre.

94. Se convino en aplazar el examen del séptimo punto hasta la reunión de septiembre del Comité.

95. El Presidente tomó nota de las observaciones formuladas. Dijo que realizaría consultas oficiosas sobre los puntos octavo y noveno, a saber, los ADPIC y los servicios antes de la reunión de junio del Comité. Señaló que la Secretaría estaba preparando un documento de base sobre esos dos puntos. Propuso que las reuniones del Comité se celebraran los días 12 y 13 de septiembre y 26 y 27 de octubre e indicó que confirmaría esas fechas en la próxima reunión.